

Efectos sobre Asentamientos Humanos

Los sismos de octubre de 1992 produjeron daños y destrozos sobre una serie de asentamientos humanos de diverso orden y tamaño. desde la segunda ciudad del país, Medellín, en la cual fue particularmente afectada la infraestructura educativa de la ciudad, hasta pequeños corregimientos y caseríos rurales ubicados a lo largo de los ríos del Chocó, en el Atrato Medio.

Estos efectos fueron principalmente sobre las viviendas y otro tipo de construcciones (escuelas, puestos de salud, edificaciones institucionales) y sobre aspectos importantes de la infraestructura de servicios y de transporte (taponamiento de ríos y daños en algunas de las carreteras de comunicación entre Medellín y el Urabá antioqueño). A continuación se presenta una síntesis de dicha afectación y de los costos aproximados calculados para su recuperación.

Para efectos de valorar los niveles de afectación de una manera cualitativa se ha propuesto una escala que define tres niveles de afectación por municipios:

- **afectación leve**, que corresponde a municipios que sólo fueron afectados en pocas construcciones aisladas, sin daño apreciable en su conjunto;
- **afectación moderada o media**, que a corresponde municipios que fueron afectados en su infraestructura o donde se deterioraron construcciones que limitan el funcionamiento normal de los centros poblados; y,
- **afectación grave**, que corresponde a municipios que se vieron severamente afectados en viviendas, construcciones e infraestructura y cuyo funcionamiento normal, por esta causa, se vio gravemente modificado y comprometido.

Daños en Medellín

Medellín fue afectada de manera leve a moderada por los sismos. Estos produjeron deterioro en 243 inmuebles privados (establecimientos comerciales, iglesias, teatros y residencias) de los cuales 25 tuvieron daños severos; adicionalmente fueron afectados 20 edificios públicos y cerca del 64% (247) de las escuelas existentes en la ciudad.

En lo que corresponde a las edificaciones públicas afectadas, su costo de reparación ha sido calculado en aproximadamente 587 millones de pesos. En lo que se refiere a las escuelas, el costo de reparación alcanzaría a 1.368 millones de pesos y el refuerzo del resto de escuelas de la ciudad ante futuros eventos se ha calculado en 3.843 millones de pesos. Ello significaría una inversión de 1.995 millones de pesos (aproximadamente 2,45 millones de dólares) en reparaciones y de 3.843 millones de pesos (4,8 millones de dólares) en refuerzo preventivo de edificaciones escolares.

En términos de pérdidas, la evaluación presentada por Juan Diego Jaramillo de la EAFIT de Medellín, incluyendo información de compañías aseguradoras, arroja pérdidas del orden de 11.000 millones de pesos en Medellín, aproximadamente 13 7 millones de dólares.

Daños en Quibdó

Quibdó fue afectada de manera relativamente leve por los sismos. La evaluación realizada da cuenta de cinco colegios y trece escuelas urbanas y de cuatro escuelas rurales afectadas, cuyos costos de reparación alcanzan los 166 millones de pesos (un poco más de 200.000 dólares). Sin embargo, debe considerarse que no se cuenta con información detallada sobre otras edificaciones afectadas aunque se conoce del deterioro de varios edificios y de la presencia de grietas en varias viviendas y otras construcciones deterioradas por el asentamiento y deformación de suelos blandos.

Daños en el Resto de Antioquia

En la región de Urabá, de los ocho municipios afectados, uno lo fue en forma severa (Mutatá), tres en forma moderada (Apartadó, Carepa y Chigorodó) y cuatro en forma leve (San Juan, Necoclí, San Pedro y Turbo). El total de viviendas afectadas en la región fue de 1.515 y su costo de reparación y/o reconstrucción alcanza a 1.731 millones de pesos.

En la región del Atrato Medio (parte antioqueña), de dos municipios uno fue afectado de manera severa, Murindó, cuyo casco urbano fue totalmente destruido) y otro, Vigía del Fuerte, de manera moderada. Fueron afectadas 749 viviendas en total y su costo de reparación y/o reconstrucción llega a 857 millones de pesos.

En la región occidental, de 18 municipios afectados sólo uno (Urrao) lo fue de manera severa, cuatro (Caicedo, Dabeiba, Frontino y Cañasgordas) de manera moderada y, el resto, de manera leve. El total de viviendas afectadas fue de 1.677 y el costo de reparación y/reconstrucción fue calculado en 1.748 millones de pesos.

Adicionalmente, en el conjunto de las tres regiones fueron destruidos 104 edificios y averiados 67 entre establecimientos educativos, centros de salud, iglesias, salones y casetas comunitarias. El valor de la reconstrucción y reparación del equipamiento comunitario afectado es 1.698 millones de pesos.

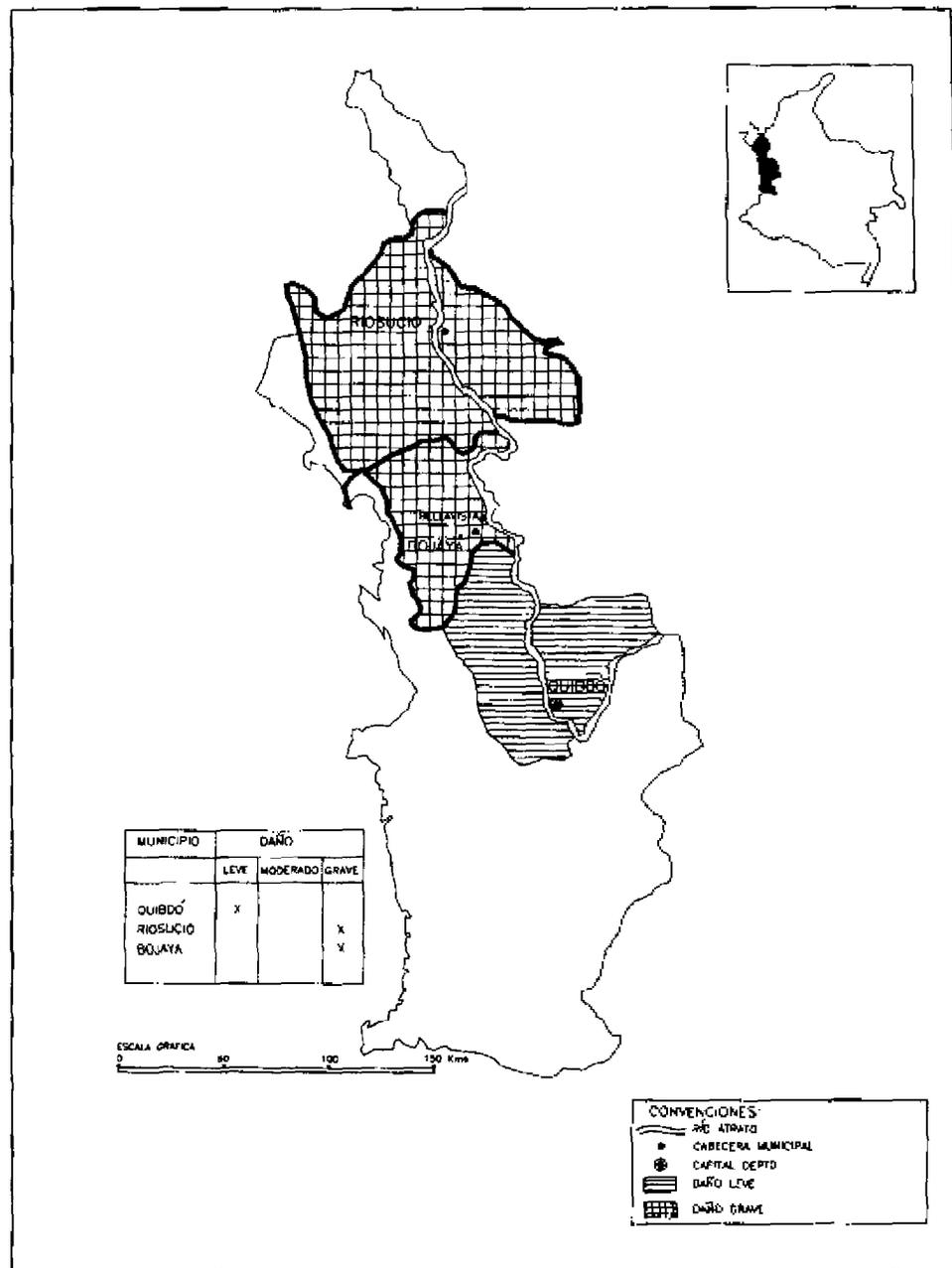
El costo total de la reconstrucción y reparación de las edificaciones y viviendas destruidas en el departamento, excepto Medellín, es 6.034 millones de pesos, aproximadamente 7,5 millones de dólares

Daños en el Resto del Chocó

Los municipios de Bojayá y Riosucio fueron severamente afectados por el desastre sísmico. La evaluación consolidada para sus cabeceras municipales, sus corregimientos y sus áreas rurales indican que fueron destruidas 1.801 viviendas (de las cuales 128 corresponden a cascos urbanos, 1.618 a corregimientos y zonas rurales y 55 a comunidades indígenas), calculándose el costo de reconstrucción de las mismas en aproximadamente 2.760 millones de pesos. (Mapa 9)

El costo de reconstrucción de establecimientos educativos, centros de salud y otros servicios comunitarios afectados se calcula en 742 millones de pesos.

MAPA 9
CABECERAS MUNICIPALES AFECTADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ



Es así como el total estimado para la reconstrucción en los dos municipios es de 3.502 millones de pesos (aproximadamente 4,3 millones de dólares).

Efectos sobre las Vías de Transporte

Las vías de transporte afectadas por los sismos son básicamente de dos tipos: fluviales y terrestres.

En el caso de las vías fluviales el arrastre de sedimentos y las arboledas destruidas por los movimientos de masa generó problemas de taponamiento y cierre de caños y la obstrucción de la navegación por empalizadas en quebradas y ríos.

El caso más grave se presentó en la jurisdicción de Murindó, Antioquia, donde una empalizada de unos 2 Km. de longitud obstruyó, en el sitio Bocas de Murindó, el acceso fluvial desde el río Atrato hasta la cabecera urbana.

El río Murindó es la única vía de comunicación con la cabecera municipal y su taponamiento generó graves dificultades de abastecimiento y comunicación con la población. Con la maquinaria disponible en la zona (malacones, palas, grúas, motosierras) se calculó en varios meses el restablecimiento de la navegación, siendo necesario además un trabajo de mantenimiento a más largo plazo para evitar la repetición del problema.

Los daños presentados en las vías regionales se concentraron en el departamento de Antioquia y se debieron especialmente a derrumbes, fallas en terraplenes, hundimientos de la banca y agrietamientos que requieren reparación. Tres puentes presentaron algunas averías estructurales que ponen en peligro la estabilidad de los mismos. El costo de la recuperación se ha estimado en unos 200 millones de pesos. La red vial nacional presentó fallas de diversa índole en los tramos Chigorodó-Mutatá, Mutatá-Dabeiba, Mutatá-Pavarondocito y Mutatá-Chocó, cuyos costos de recuperación fueron estimados en 670 millones de pesos.

Entre vías departamentales y nacionales, los costos de recuperación alcanzan los 870 millones de pesos (un poco más de un millón de dólares).

Otros Aspectos del Impacto

Aunque las pérdidas ambientales y buena parte de los costos sociales (producción, empleo, migración, abandono de la territorialidad e, incluso, a partir del sismo, introducción de nuevas relaciones de los indígenas, por ejemplo, con el medio y con el entorno social) no han sido y algunos no son cuantificables en términos económicos, los costos calculados de la recuperación, producto de las evaluaciones de daños realizadas entre octubre y diciembre de 1992 dan cuenta del impacto del sismo. Estos costos sumados ascienden a 12.567 millones de pesos (aproximadamente 15.7 millones de dólares).

Aunque estas cifras son parciales, de todas maneras permiten señalar que el costo económico, por importante y alto que sea, no siempre da cuenta de los efectos de un desastre. En las cifras anteriores, Medellín y el occidente antioqueño representan un porcentaje relativamente alto del costo. Sin embargo, con la excepción de Urrao y otros tres o cuatro municipios, el sismo sólo los afectó levemente, no interrumpió de manera permanente y duradera sus condiciones normales de

vida y no afectó las modalidades y condiciones mismas de producción y reproducción de las comunidades.

Igualmente ocurre si comparamos, por ejemplo, el número de viviendas destruidas. En Urabá este número es similar, grosso modo, al del Atrato Medio. Sin embargo, el impacto social es probablemente mayor, por las condiciones y características de las regiones ya expuestas más arriba, en el Atrato Medio. La destrucción del casco urbano de Murindó, con sus cien casas y su pequeña infraestructura institucional y comunitaria es, dadas las condiciones de la región, más "desastrosa" que la destrucción de 100 casas en Apartadó.

Otro elemento que puede sacarse de los resultados de la evaluación de daños y que tiene que ver con la vulnerabilidad global frente a los desastres, es la manera relativamente rápida como se realiza dicha evaluación en Antioquia (por razones de capacidad institucional y de relativamente fácil comunicación) y la manera lenta (difícil acceso a ciertas regiones, por ejemplo, lo cual meses más tarde, en la formulación de proyectos de recuperación va a aumentar el número de comunidades rurales afectadas) e incompleta (caso de Quibdó) en que se realiza en el Chocó.

Pero además, esto tiene que ver con la "voluntad política" de hacer las cosas local y regionalmente y con la actitud asumida en ciertos momentos por la población y las autoridades locales.

Este último punto nos remite a otra característica del proceso de evaluación de daños: el papel principal jugado por los organismos regionales (comités regionales y entidades regionales) y nacionales del Sistema. Se contó de una manera rápida con una evaluación global de daños (la primera a finales del mismo mes de octubre) gracias a la movilización de recursos humanos y financieros de estos niveles.

Con excepción de Medellín y tal vez de algunos municipios de Antioquia, el operativo de evaluación de efectos y daños correspondió básicamente a los niveles regionales y nacionales. La incapacidad y ausencia de recursos locales para ello fue notoria.

La Gestión de los Desastres

Independientemente de las particularidades de cada una de las regiones afectadas y de los impactos diferenciales causados por el evento, los procesos de gestión de los desastres obedecen a las condiciones, herramientas y políticas con que cuenta un país para hacer frente a dichas situaciones.

Es cierto que la población afectada es no sólo la primera en sufrir los efectos sino la primera que tiene que responder, de manera espontánea o de manera organizada según los casos, a un desastre. Pero, en general también es cierto que toda población que sufre una calamidad necesita y espera, en un tiempo muy corto, el apoyo venido de "afuera", para poder superar y manejar la situación.

Este "afuera" pueden ser muchas cosas: desde los niveles más locales de la estructura estatal (las municipalidades, por ejemplo) hasta el gobierno nacional, pasando por las ONGs o por la ayuda internacional. Y para cada nivel, este "afuera" es distinto.

Hablar de un análisis global en este contexto implica valorar la actuación de los diversos actores que tienen que ver con la gestión de desastres en su actuación frente al evento, así como el comportamiento de diversas fuerzas sociales que de una u otra manera tuvieron que ver con él.

Por otra parte, habiendo diferenciado las diversas regiones afectadas por el sismo, cada una de las cuales tuvo su propio desastre y su propia manera de resolverlo, se escogió la del Atrato Medio como caso de análisis particular, a partir de la consideración de los siguientes aspectos:

- el carácter marginal y/o periférico de la zona afectada. Por diferencia con Urabá, el Occidente de Antioquia y las capitales, que fueron las otras zonas afectadas por los sismos del 17 y del 18 de octubre de 1992, la región del Atrato Medio presenta, casi se podría decir que de una manera exagerada, las condiciones de marginalidad y de distanciamiento de los centros regionales y/o nacionales de poder económico, político y social, que la hacen destacarse frente a las otras en este sentido. Esto no quiere decir que no presente una importancia para el país, importancia que veremos más adelante, y que se estén apenas iniciando procesos conducentes a su integración más directa. Sin embargo, es relativamente claro su carácter marginal, como región.
- el impacto de los sismos no produjo gran número de muertos o heridos y las pérdidas materiales, aunque importantes, por las mismas condiciones de vida y desarrollo de la región no pueden compararse con las causadas por otros eventos más grandes e, incluso, con las causadas en términos económicos en Medellín, por ejemplo. Esto hace pensar que el caso puede ser ubicado dentro de lo que se ha llamado "desastre típico", que afecta al país y a América Latina todos los años y que por no recibir la atención y propaganda de los "grandes desastres" no son menos significativos en términos de la acumulación de vulnerabilidades en nuestro medio.
- la región escogida comparte con los otros dos casos analizados el de estar ubicada en una zona ambiental de bosque húmedo tropical, contar con una baja densidad demográfica y prácticamente sin concentraciones urbanas importantes (ninguno de los poblados de mayor tamaño, especialmente las cabeceras de los cuatro municipios de la región supera los 3.500 habitantes) y, por consiguiente, con una gran dispersión de la población en zonas rurales alejadas y de difícil acceso.
- la complejidad de rasgos y procesos sociales presentes en la región, desde las características de las comunidades negras e indígenas y sus relaciones hasta el análisis de los diversos tipos de procesos migratorios y de colonización, el grado alcanzado por ellos y la presencia de grupos armados, permiten visualizar una trama de relaciones y actitudes que en diversa forma y de varias maneras va a influir en el desarrollo de la gestión del desastre.

- el hecho de que la región, desde un punto de vista político-administrativo corresponda a dos jurisdicciones distintas, que están en polos opuestos de una escala de capacidad de gestión, fortaleza y recursos (Antioquia, el departamento probablemente más fuerte del país, Chocó, el más débil), permite ver, sobre un mismo escenario, la actuación compleja y diferente de un mismo Estado y de un mismo Sistema Nacional.
- se quiere destacar, a partir de esos elementos y para tres momentos del proceso de gestión que consideramos centrales (la evaluación de daños, la atención de la emergencia y el proceso de reconstrucción y recuperación), los criterios, políticas y acciones de participación institucional (pública y privada), sus impactos y consecuencias, incluyendo esferas no relacionadas directamente con la zona, así como la participación de las comunidades afectadas (cuando la hubo), o al menos, algunas impresiones dejadas en dichas comunidades por la acción de los otros actores.

Por estas razones, el análisis que a continuación se presenta de las fases de impacto y recuperación desarrolladas con ocasión de los sismos de octubre de 1992 incluye, para cada fase, un análisis global de lo desarrollado y un análisis específico del caso del Atrato Medio y va precedido de una caracterización más específica de dicha región.

Las Condiciones Existentes en la Región del Atrato Medio

En el apartado anterior se ha hecho una primera aproximación a la caracterización de la región del Atrato Medio. A continuación se complementa esta caracterización con algunos rasgos más específicos de la región.

Compuesta por cuatro municipios, dos en Antioquia (Vigía del Fuerte y Murindó) y dos en el Chocó (Bojayá y Riosucio), la región tiene una extensión de un poco más de 17.000 km². De acuerdo con los datos del Censo de octubre de 1993, su población tiene un total de 44.179 habitantes, de los cuales apenas un 16 9% viven en las cuatro cabeceras municipales y el resto en pequeños poblados, generalmente a orillas de los ríos principales o de manera dispersa.

Proceso de Poblamiento y Tipo de Asentamientos

El proceso de colonización y, por consiguiente, de poblamiento negro se inició en forma continua hacia la década de 1920, siguiendo el río Atrato hacia el norte de Quibdó y estableciéndose a orillas de dicho río o de sus afluentes. Esta corriente colonizadora provenía de los municipios del sur de Quibdó abriendo platanares en las riberas de los ríos Atrato, Murri, Arquía, Murindó, Bojayá, Bete, Tagachí, Bugadó, Napipí y Opagadó.

Aunque en forma directa este proceso no fue violento y los niveles de conflictividad fueron relativamente bajos ante la disponibilidad de tierras ocupables, contribuyó al desplazamiento de las comunidades indígenas, en algunas zonas, hacia las partes altas de las cuencas tributarias del Atrato

Una primera fase del proceso se caracteriza por el hábitat disperso aislado, correspondiente a una familia migrante. De este núcleo familiar se desprende la generación siguiente de casas vecinas

de los hijos y de los nietos: así va surgiendo la aldea. De este tipo de aldeas llegaron a fundarse hasta cincuenta, de las cuales persistían unas 30 en 1986.

Las colonias iniciales son "a la vez permanentes y continuas, pero también móviles, cíclicas y rotatorias, si se puede decir. Muy a menudo se comprueba la recolonización de una misma labranza por un nuevo colono, en tierras que fueron anteriormente desmontadas por un labrador que luego migró a otra zona, dejando la primera estancia abandonada, la cual volvió a su estado selvático en poco tiempo, y así quedó disponible" (Aprile-Gnisset 1992: 267-268). Caso similar ha sucedido ya no con viviendas o labranzas aisladas sino con pequeños poblados

Las condiciones de la zona auspician la radicación del colono sobre el río, en aldeas compuestas por hileras de casas con acceso directo al río (transporte, pesca), con un espacio para una parcela ubicada entre la selva y el agua. Esta tipología lineal inicial corresponde en las posibilidades de explotación agrícola (entre la selva y el río) y a la necesidad de sacar algún excedente hacia otros mercados, por mínimo que este sea.

En el naciente pueblo se van conformando zonas de uso: "El talud del río y el terraplén configuran un paseo comunal de estricto uso público que no obstaculiza ninguna construcción privada. Está bordeado por la fachada principal de las casas, cada una de las cuales está rodeada por un pequeño espacio de libre circulación, semiprivado y semipúblico. En la parte posterior, detrás de las cocinas, se extiende un amplio solar-huerta con frutales, gallinero y marranera, el cual puede tener hasta 40 ó 50 metros de profundidad" (Aprile-Gnisset 1992: 267-268).

Esta tipología inicial de los asentamientos ha ido variando con el tiempo, con la llegada de nuevos pobladores y con la aparición de nuevas necesidades y de nuevos servicios.

Al decir de Aprile (Aprile-Gnisset 1992: 268 y ss.), "la red regional de aldeas presenta un amplio abanico de tipologías, según la fase de desarrollo alcanzado por los distintos asentamientos. Con unas diez casas el núcleo muestra su primera tendencia de hacerse sedentario; alcanzando unas treinta viviendas, se advierte su consolidación. Agrupando entre 50 y 100 familias ha logrado éxito y persistencia, adquirió marcada estabilidad durante el transcurso de tres o cuatro generaciones de moradores y a veces se convirtió en pequeño centro comercial de consumo, acopio, mercadeo y servicios de corregimiento. Reuniendo unas 200 familias fácilmente adquiere autoridad y el papel de cabecera de un nuevo municipio, tal como ocurre en Bojayá (Bellavista), Vigía del Fuerte y Riosucio". Cuando la aldea sobrepasa las 30 ó 40 casas el modelo lineal encuentra sus límites, ya sea debido a distancias o a obstáculos físicos que encuentra para su expansión (caños, por ejemplo).

La consolidación del asentamiento inicial, el "éxito" de la producción agrícola o maderera, la llegada de comerciantes y transportadores o de nuevos colonos y la correlativa ampliación del mercado, es decir, el paso de la economía de subsistencia a una economía más marcada por el intercambio mercantil y por las necesidades de nuevos espacios tanto en términos de vivienda como de actividades económicas, lleva a la transformación de la estructura lineal en estructura con varias calles, plaza y espacios para actividades institucionales que antes no existían.

Estos cambios implican un uso del espacio y un manejo distinto del medio: ocupación de zonas bajas distintas a las tradicionales (diques naturales de los ríos), ubicación definitiva de los asentamientos y desaparición de los poblados "migrantes" en autoajuste con las condiciones del medio físico (traslado de pueblos frente a inundaciones y búsqueda de recursos de subsistencia), hasta configurar poblados de tipología similar al de cualquier región andina

El proceso anterior se da de Quibdó hacia el norte. De las bocas del Atrato hacia el sur se presenta, en una época más reciente (años 1950 y 1960) otros tipos de procesos de colonización, vinculados en forma inicial a la explotación de la madera y con la presencia de empresas madereras relativamente grandes. La corriente migratoria proviene de la zona del Urabá antioqueño, desplazados por la actividad bananera, y otras regiones de la costa Atlántica y está compuesta principalmente por chilapos y blancos-mestizos con vocación agrícola, que tumban monte inicialmente y luego constituyen parcelas para explotación agrícola o pecuaria y se constituyen, con el tiempo, en pequeños campesinos.

Finalmente, está el caso de Murindó en su casco urbano, el cual representa, de alguna manera, la cabeza de colonización antioqueña en la región y el ejemplo de traspaso de una tipología urbana y constructiva propia de la zona andina antioqueña a la zona del Atrato Medio.

Condiciones Socioeconómicas Generales

Como se señaló anteriormente, la explotación económica es básicamente de tipo extractivo, maderas finas y duras que comercializan los campesinos a grandes empresas madereras concesionarias de terrenos con autorización del Estado, así como algunas prácticas agrícolas en las orillas altas, principalmente de plátano, maíz, arroz y yuca, destinadas al autoconsumo, con muy pocos excedentes comercializables, con excepción del arroz, del plátano y algo de maíz. La pesca artesanal y, en el caso de los indígenas, la caza, se constituyen en actividades de subsistencia.

Mientras los indígenas sostienen prácticas económicas básicamente de subsistencia, las comunidades negras y mestizas desarrollan aquellas que, en parte, están destinadas al mercado. Los canales de comercialización y de transporte están, en general, en manos de mestizos y blancos.

La madera y el bosque han sido objeto de una intensa explotación por grandes empresas, dado su alto valor comercial y el mercado para ello existente tanto en otros departamentos del país como en el exterior. Buena parte de la explotación es realizada por campesinos con maquinaria pequeña (motosierras y sierras manuales) y es vendida a las principales empresas de la zona.

Estas empresas (Pizano y Cía., Maderas del Darién), tienen adicionalmente concesiones para la explotación, en las cuales utilizan maquinaria relativamente pesada para explotación, arrastre y transporte. Los principales puntos de comercialización están en Urabá (Turbo y Apartadó) y en Medellín, Barranquilla y Cartagena. Existe transformación primaria realizada con motosierra y secundaria elaborada en los siete aserríos existentes en el municipio. En algunas zonas de bosque talado se realizan quemas para establecer parcelas para cultivos de pancoger y pastos para ganadería.

El transporte es básicamente por vía fluvial, tanto el de pasajeros como el de los productos, sea hacia Quibdó, centro importante de comercialización de los municipios de Murindó, Vigía del Fuerte y Bojayá, sea hacia el Urabá Antioqueño y otras regiones de la Costa Atlántica, centros de comercialización de la madera y de productos agrícolas, especialmente provenientes del municipio de Riosucio.

Un alto porcentaje de la población vive de manera dispersa o en pequeños caseríos que no cuentan prácticamente con ningún tipo de infraestructura de servicios básicos (acueducto, alcantarillado, energía). En las cabeceras municipales, cuando estos existen, son de mala calidad y de escaso cubrimiento. La vivienda es construida básicamente en madera y materiales de la zona, con excepción de algunas cabeceras municipales donde los materiales principales son el cemento y el ladrillo. A este respecto existe una gran diferencia entre las cabeceras municipales del Chocó y las de Antioquia: por ejemplo, Murindó contaba desde 1990 con acueducto, mismo que fue destruido por el sismo.

Presencia y Organización del Estado

Desde un punto de vista general, la presencia del Estado ha sido supremamente débil en la región, particularmente en el Chocó, siendo este departamento el que presenta probablemente los más bajos niveles de capacidad de gestión local y regional en el país.

Son municipios con una débil estructura político-administrativa, con bajos recursos presupuestales, la mayor parte de los cuales se van en gastos de funcionamiento de la pequeña burocracia local. Dependen en el desarrollo de su infraestructura de servicios públicos y sociales de los aportes de los departamentos o de la región. Sus fuentes presupuestales provienen en buena medida de transferencias del gobierno central y sus recursos propios son prácticamente nulos.

Las alcaldías y otras funciones públicas constituyen una de las pocas fuentes de empleo distintas a las actividades agropecuarias y forestales. En este sentido el ejercicio del poder formal a nivel local (alcaldía, concejos municipales) se basa en reducidas clientelas, pertenecientes generalmente a los dos partidos tradicionales (liberal y conservador) quienes de una manera u otra se alternan en la alcaldía y en la repartición de cargos públicos. La elección popular de alcaldes, a partir de 1988 ha permitido el nacimiento de movimientos cívicos o de negritudes, todavía muy poco fuertes, que tienden a disputar esas posiciones políticas a los políticos tradicionales de la región.

En general, lo que podemos llamar clase política del Atrato Medio, particularmente en los municipios de Bojayá y Riosucio está conformada por miembros de la comunidad negra que han tenido acceso a puestos públicos del nivel local y/o regional, y que han establecido su clientela dentro de sus comunidades de origen. Las comunidades indígenas están completamente marginadas del ejercicio del poder formal y tradicional, mientras los mestizos y blancos sólo participan tangencialmente, con excepción de los municipios antioqueños (Murindó y Vigía del Fuerte), donde su presencia política es mayor.

Adicionalmente a los reducidos puestos públicos, buena parte de la clientela de los políticos y líderes tradicionales de estas comunidades se ha constituido a través de mecanismos tales como

las juntas de acción comunal, existentes en la mayor parte de las cabeceras y corregimientos y cuyo sustento se derivaba de la aplicación de los llamados "auxilios parlamentarios", consistentes en partidas del presupuesto nacional, departamental o municipal, puestos a libre disposición de concejales, diputados o parlamentarios, con objetivos de "beneficencia y obras comunales".

A través de las partidas entregadas a juntas comunales para pequeñas obras e incluso para comprar votos en épocas electorales, se consolidaron lazos de dependencia y dominación política, base del ejercicio local del poder. Sin embargo, a partir de 1991 con la supresión de los auxilios, es probable que estos lazos tiendan a aflojarse y que las juntas de acción comunal puedan cumplir un papel más claro e independiente de representación de las comunidades y de organización de las mismas.

Un elemento a tener en cuenta en términos de evolución de los lazos políticos existentes y de las formas de ejercicio del poder lo representan las innovaciones introducidas por la Constitución de 1991 en lo que tiene que ver con las comunidades negras e indígenas. El reconocimiento de la propiedad colectiva de la tierra y del derecho a organizarse territorialmente con autoridades propias, probablemente, de aplicarse, abrirá nuevas perspectivas.

A pesar de lo anterior, en el caso de las comunidades negras no puede hablarse de la existencia de un amplio movimiento social por sus reivindicaciones. Aunque existen pequeñas organizaciones sociales y culturales que a nombre de las negritudes levantan algunas reivindicaciones, al menos localmente, es poco el impacto que hasta ahora ha tenido, por ejemplo, la Ley de Negritudes.

La presencia departamental en los municipios es diferenciada: mientras en los dos del Chocó esta es prácticamente inexistente, dado que el departamento comparte las mismas características de recursos y de gestión que los municipios, en los antioqueños la presencia es mayor, particularmente en lo que tiene que ver con salud, educación y servicios públicos básicos (acueductos y hospitales, por ejemplo, financiados en buena parte y construidos por el departamento).

En el caso de este último departamento, su presencia institucional se ha incrementado en los últimos años, debido al interés político de Antioquia por una salida al Pacífico, presencia que no se reduce a los municipios de su jurisdicción sino también a sus vecinos de la parte chocoana. Así por ejemplo, un buen porcentaje de la población de Bojayá acude a Murindó y a Vigía del Fuerte por servicios de salud, ante la ausencia de los mismos en su departamento.

La presencia del nivel nacional en la región se ha dado principalmente a nivel de la existencia de una serie de instituciones del Estado, principalmente en las cabeceras municipales y con una baja cobertura en el conjunto de la zona.

Esta presencia tradicional se ha dado a través por ejemplo, del Instituto Nacional de Bienestar Familiar (ICBF) en las cabeceras, del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA en Quibdó y con algunos programas móviles, de sucursales de la Caja de Crédito Agrario en las cabeceras o de puestos de mercadeo agropecuario del IDEMA (Instituto de Mercadeo Agropecuario) o de algún tipo de asistencia técnica del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario).

La existencia de esta presencia no oculta el profundo abandono político y económico de la región por el nivel central, el desconocimiento de su importancia y de sus recursos. Pese a las acciones de éstas y otras instituciones puede hablarse de una ausencia política y económica del nivel central en la región, la cual se expresa en los escasos recursos a ella destinados.

Sólo hasta hace poco tiempo (últimos diez años) se ha venido dando un reconocimiento de la importancia estratégica de la región (salida al Pacífico, posibilidades de puertos y vías terrestres alternativos al existente –Buenaventura–, explotación de recursos naturales, biodiversidad, resolución de conflictos existentes) y de la necesidad de intervenir en ella de manera más decidida.

Esta intervención se articuló inicialmente a través del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) y las actividades de CODECHOCÓ (Corporación Autónoma Regional del Chocó), entidades dependientes de la Presidencia de la República y del Departamento Administrativo de Planeación, respectivamente. Además, se ha dado una relativa presencia de la región Occidente, a través del Consejo Regional de Planificación (CORPES), que agrupa a los departamentos de Antioquia, Chocó, Caldas, Cauca, Nariño, Quindí, Risaralda y Valle del Cauca.

Adicionalmente la formulación y desarrollo del llamado Plan Pacífico y la inversión prevista a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por aproximadamente 50 millones de dólares, probablemente va a permitir una mayor presencia y acción del Estado en la región, para nuestro caso especialmente en los municipios de Riosucio y Bojayá.

Organización de la Comunidad

Los niveles de organización de la comunidad varían de acuerdo con las diferentes zonas y/o localidades, así como de acuerdo con el tipo de población de que se trate.

Quienes presentan aparentemente un nivel más alto de organización son las comunidades indígenas, que además de sus estructuras tradicionales propias correspondientes a la organización en resguardos (cabildos y gobernadores indígenas), hacen parte y cuentan con el apoyo y la solidaridad de organizaciones indígenas regionales, especialmente la Organización Indígena de Antioquia (OIA) en el caso de Murindó y Vigía del Fuerte, y de la Organización Indígena Regional Emberá-Wuanana (OREWA) en el caso de los municipios del Chocó.

Se estima que para el caso del Chocó existen unos 28.000 indígenas, de los cuales aproximadamente 6 000 corresponden a las zonas media y baja del Atrato. En el caso de Antioquia, el número de indígenas de los dos municipios contemplados puede alcanzar la cifra de unos 6.500.

Como veremos más adelante, el proceso de atención, pero sobre todo el de recuperación de las comunidades indígenas contó con la participación de estas organizaciones y tuvo una dinámica diferente al del resto de comunidades

Los indígenas han permanecido relativamente aislados, conservando en lo fundamental sus características étnicas y culturales. Habiendo sido desalojados por los procesos de colonización